



La educación chilena y la porfía de las élites

No hay caso con la clase política chilena. Lleva décadas esgrimiendo evidencias falaces, argumentos ideologizados y defendiendo intereses mezquinos para preservar un sistema educativo estructuralmente inequitativo y discriminatorio. Y a pesar de que sus propios tecnócratas y medios de comunicación empiezan a reconocer implícitamente que los cambios deben apuntar dónde los movimientos sociales han reiterado, porfían en ofrecer medidas que sólo refuerzan el sustrato neoliberal de la educación chilena. Las conclusiones del panel de “expertos” creado por Lavín y una encuesta de percepción sobre el SIMCE aparecida en El Mercurio lo ratifican.

A veces El Mercurio ofrece arranques de sinceridad que no se pueden dejar pasar. Sobre todo cuando dan la oportunidad de demostrar las contradicciones de las élites en cuanto a la educación que dicen querer y la que realmente quieren. Dicho de otra forma, la contradicción entre las transformaciones educativas realmente necesarias, y las transformaciones que la clase política está dispuesta a realizar sin arriesgar el status quo.

Caso 1: el SIMCE

La ofensiva comunicacional del gobierno de Piñera en materia educativa ha tenido como protagonista al ministro de Educación, Joaquín Lavín, en una clara estrategia de posicionamiento público. Las puestas en escena se han centrado en una serie de medidas anunciadas por Lavín para fortalecer el SIMCE como herramienta de medición de calidad, en primera instancia; pero sin considerar al SIMCE como termómetro de las diferencias económicas -de los establecimientos, las comunas y las familias- del sistema educativo.

Dos de las principales y más mediáticas propuestas a implementar son el “mapa del SIMCE”, que cartografía territorialmente las escuelas y liceos según su desempeño en esta prueba, sin considerar variables como tipo de administración, densidad estudiantil o si el establecimiento selecciona, por nombrar algunos de los más relevantes¹; y la distribución de 600 millones de pesos en implementos escolares a los 150 colegios que superaron el promedio nacional del Simce, sin discriminar entre particulares-subvencionados y municipales, monto a repartir que se aumentará al doble el próximo año.

Sin ir más lejos, en la edición del domingo 13 de junio de El Mercurio, un reportaje sinceraba respecto de las reales condiciones en que se realiza el SIMCE en los establecimientos. Por ejemplo, “más de dos mil liceos tuvieron a menos de nueve alumnos en sus aulas rindiendo el Simce. De estos, 1.689 sólo tenían cinco alumnos, por lo que el Mineduc considera que su puntaje no es publicable”. Para el reportaje, se tomaron los colegios con menos de 20 alumnos rindiendo la prueba y dentro de los 50 mejores puntajes. Midiendo su asistencia, concluyeron que “de los 40 colegios escogidos, sólo dos tuvieron el 100% de asistencia de sus matriculados rindiendo la prueba. En el resto, la tasa de inasistencia oscila entre el 10 y el 55%”².

1 Para una visión crítica más profunda, lea el reportaje publicado en El Ciudadano: Díaz, Priscilla ¿Educación o Instrucción de Calidad? En: www.elciudadano.cl

2 Ver: http://diario.elmercurio.com/2010/06/13/reportajes/_portada/noticias/

La toma del Liceo Confederación Suiza puso en evidencia otra perversión común: los reforzamientos para el Simce (los estudiantes demandaban que ésta no fuera obligatoria). Esta lógica cae en el absurdo. El SIMCE debiese ser una muestra representativa de determinados aprendizajes en cada establecimiento según su capacidad regular; si ya es cuestionable por reducir el concepto de calidad a aprendizaje estandarizados, más lo es si se convierte, en vez de un instrumento de medición para la mejora de los establecimientos, en un semáforo de competencia interescuelas, para la cual ellas se preparan con más clases. Una paradoja sin sentido... para el que no comprende la lógica neoliberal.

El martes reciente el Mineduc, a través de El Mercurio, nos proporcionó otro reportaje que contribuye a profundizar este absurdo. Según una encuesta aplicada a los apoderados, sólo un 14,5% escoge el colegio de su hijo/a según el desempeño Simce o PSU, cifra que baja del 6% en los sectores populares (donde se pretende que influya más el “semáforo” del SIMCE). Por lejos, el factor más incidente de elección es la cercanía al hogar, lo que ratifica -a pesar de la voluntad del Mineduc- la importancia de la construcción de comunidad alrededor de una escuela. Y, de pasada, pone en evidencia el fracaso de la estrategia competitiva desplegada hace 30 años en Chile.

Así, ¿cuál debe ser la importancia del Simce? ¿Dónde está la porfía de las élites? En insistir en convertir un instrumento de evaluación que debiese ser interno, de autoevaluación de las escuelas, en un parámetro de competencia para configurar el mercado educativo, a pesar de que la realidad les demuestra que la competencia es antónimo de aprendizaje y que desvirtúa los procesos educativos, como lo dijo hace apenas unos días uno de los mas importantes investigadores en políticas educativas, Martin Carnoy de la Universidad de Stanford, Washington³.

Caso 2: panel de “técnicos”

Si ya se había criticado la conformación del Consejo Asesor de la Educación en 2006 por la presencia excesiva de tecnócratas por sobre representantes del mundo social, el panel de “técnicos” (según los califica El Mercurio) convocado por Joaquín Lavín es la cúspide de la tecnocracia. Dicho panel cuenta con la presencia de destacables “expertos” como los alcaldes Pablo Zalaquett y Jaime Pavéz, además de eximios representantes de la Concertación y la derecha, como Mariana Aylwin, Sergio Molina, Harald Beyer, J. J. Brunner y Patricia Matte. Además del rector de una Universidad privada de las más elitistas del país, la Universidad Católica de Santiago, donde más del 70% de la matrícula proviene de Colegios Particular-Pagados. No participa ningún ex rector de Universidad estatal, así como ningún dirigente social.

Esta semana se anunciaron las propuestas que entregarán al Mineduc en torno a la carrera docente⁴. Básicamente, se pretende elevar las exigencias para el ejercicio docente a través de un examen de habilitación obligatorio, y se definirían sanciones para las casas de estudio que no logren acreditarse por un mínimo de cuatro años por dos períodos consecutivos, además de becar a los buenos puntajes PSU y subir las cifras de corte para el ingreso a las pedagogías.

Entendiendo que la formación de profesores es un elemento central para mejorar el sistema educativo, los “expertos” parecen reconocer que uno de los problemas más

3 Véase entrevista “La competencia en educación es una locura de la derecha” en El Mostrador: <http://www.elmostrador.cl/>

4 Véase: <http://diario.elmercurio.com/2010/07/01/nacional/nacional/noticias/>

graves está en la mala calidad de dicha formación. Pero en vez de atacar el fondo del asunto y hacerse cargo del origen de ella, nuevamente se ataca el mal con la receta parche: sanciones flexibles, pruebas estandarizadas, que no tocan la anarquía (“libertad de emprendimiento”, dirían ellos) en la creación y desarrollo de carreras pedagógicas. La evidencia internacional demuestra que cuando se establece una política nacional, de carácter integral, que involucre un Estado protagónico y el concurso de la ciudadanía, el rol del profesor de valoriza y su calidad profesional crece sustancialmente. En cambio, bajo la lógica actual, se siguen reproduciendo las malas condiciones laborales, la desvalorización social del pedagogo, una formación volcada al mercado, etc.

Peor aún, la propuesta de becar a los buenos puntajes y de subir los puntajes PSU de corte implica convencer a los sectores socioeconómicos altos (que son quiénes concentran los altos puntajes PSU) de estudiar pedagogía, a través de incentivos económicos que no necesitan y que podrían ser destinados a sectores populares para su ingreso a la educación superior.

En este caso, su porfía es más evidente: reconociendo que es necesario cambiar la formación docente, en vez de transformarla de raíz y darle una orientación pública, se cree que con dos o tres retoques y castigos es suficiente.

Este mismo grupo, se anunció, se encargará de ahora en adelante de estudiar y proponer reformas a la educación pública. Sinceramente, con estos antecedentes, ¿qué propuestas podemos esperar de ellos?

Observatorio Chileno de Políticas Educativas
“El derecho ciudadano de participar en la educación pública”